



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: EFRÉN CARDOZO PINZÓN
Demandados: ACP COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 016 2019 00171 01
Sentencia: S-111

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y –en esta oportunidad el Magistrado HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ (toda vez que el Magistrado JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ quien integra la Sala Primera le fue aceptado impedimento en el este proceso judicial)-, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES, al igual que el grado jurisdiccional de Consulta a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el día 24 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

EFRÉN CARDOZO PINZÓN demandó a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad o ineficacia del

traslado o de la vinculación efectuada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-, por falta del deber de información, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar a este fondo público, los aportes de la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos e intereses financieros y todos los conceptos recibidos. Pretende además la condena en costas a las demandadas.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 5 de septiembre de 1958; que cotizó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- 136.86 semanas y al RAIS 1.085,14 semanas; que se afilió al ISS dese el 29 de abril de 1985; que se trasladó al RAIS el 11 de octubre de 1996, debido a la estrategia comercial de PROTECCIÓN S.A., quien no le otorgó una asesoría adecuada, íntegra, suficiente, clara, oportuna y ciertas, como tampoco le informó sobre las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; que no le informó del período de gracia que tenía para trasladarse; que elevó solicitudes al fondo privado a las cuales se les dio respuesta; que para el año 2018, tenía un valor acumulado en la cuenta de \$99'687.027; y que solicitó el traslado a COLPENSIONES, el cual fue negado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento del demandante; que no le constan las semanas cotizadas, pero expresa que en este régimen ha cotizado 1.145,14 semanas; que no le consta la afiliación en el Régimen de Prima Media; que es cierto que el actor se afilió a este régimen, nunca se le vulneró el derecho al consentimiento informado, pues los asesores de la administradora son capacitados para brindar a los futuros afiliados las condiciones propias del Régimen de Ahorro Individual, explicándosele todas las características de este régimen; que es cierto que el demandante

presentó derechos petición, los cuales le fueron contestados; y que no le consta los hechos que van dirigidos en contra de otra entidad. Se opuso a las pretensiones, toda vez que nos encontramos frente a un acto existente, válido, exento de vicios del consentimiento y de cualquier fuerza para realizarlo. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del Sistema General de Pensiones e inexistencia de la obligación de devolver la cuota de administración.

COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante; que no le consta las semanas cotizadas por el actor; indicando frente a los demás hechos que no le constan por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento y ser personales del demandante. Se opuso a las pretensiones, toda vez que la afiliación del actor al RAIS, fue de manera libre y voluntaria. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de derecho para pedir, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas; buena fe y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 24 de mayo de 2022, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, tomó las siguientes decisiones:

PRIMERO: DECLARAR INEFICAZ la afiliación de EFRÉN CARDOZO PINZÓN, realizada a PROTECCIÓN S.A. el 11 de octubre de 1996, por lo expuesto en la parte considerativa. En consecuencia, DECLARAR que para todos los efectos legales nunca se trasladó al RAIS y por lo mismo siempre permaneció en el régimen de prima media.

SEGUNDO: Se ORDENA a PROTECCIÓN S.A., trasladar al demandante al régimen de prima media administrado por COLPENSIONES-.

TERCERO: Se ORDENA a PROTECCIÓN S.A., devolver al régimen de prima media, todos los valores que hubiere recibido con motivo

de la afiliación del demandante, incluyendo las cotizaciones de forma completa, los bonos pensionales, cualquier suma adicional, frutos e intereses, sin que pueda retener los gastos administrativos ni los aportes de solidaridad ni ningún concepto, pues se considera que en ningún momento debió producir ningún efecto jurídico dicho traslado. Esta erogación deberá realizarla con cargo a sus propios recursos.

Para el cumplimiento de esta obligación se concede un término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CUARTO: Se ORDENA a COLPENSIONES, reactivar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida a la parte demandante y recibir todos los dineros que sean trasladados por PROTECCIÓN S.A.

Se autoriza a COLPENSIONES, realizar un cálculo de equivalencia de los dineros recibidos desde el RAIS, de forma tal que no le genere perjuicio alguno recibir a la parte demandante al momento de cumplir con las obligaciones pensionales a su cargo.

QUINTO: Respecto de las excepciones propuestas por PROTECCIÓN S.A. dado el allanamiento, me abstengo de resolverlas y de condenarla en costas por la intención de conciliar y el allanamiento en sí mismo.

SEXTO: CONDENAR en costas a COLPENSIONES; Se fijan como agencias en derecho la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000.00). Se ordena que por secretaría se liquiden las mismas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 366 del Código General del Proceso.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de COLPENSIONES manifestó en su recurso que en esta clase de procesos se ha observado una serie de conciliaciones por parte de los fondos privados, pero se ha manifestado por parte del Tribunal que esto no es procedente, asimismo tampoco es posible un allanamiento por parte de esta entidad pública, ya que el artículo 99 del C.G.P, indica que cuando no provenga de todos los demandados y exista un

litisconsorcio necesario como es el caso, es ineficaz dicho allanamiento; que es cierto que el artículo 98 del C.G.P, habla de allanamiento a la demanda, siendo posible para las demandadas y en este caso para PROTECCIÓN S.A., pero no es como lo dice el juez que sería el no tener que resolver las excepciones, sino es mas bien un desistimiento a la práctica de las pruebas; que si bien el derecho procesal debe ser práctico, tiene unos contornos relevantes, pues no se trata de practicidad sino del debido proceso y acá se debe observar que el acta de conciliación parecía mas bien una sentencia, y si no fuere atacado por COLPENSIONES, se estaría violando las garantías procesales y el debido proceso de esta entidad, al no permitírsele el derecho de defensa y contradicción; que si bien el juez planteo que el proceso no ha terminado por causa de COLPENSIONES, se observa que con la nulidad de la actuación proferida por el Tribunal, no se puede llegar a una conciliación, pues se debe respetar las garantías procesales, y por tal razón no comparte que se le impute la mora a COLPENSIONES en este sentido; que COLPENSIONES no puede llevar a cabo una conciliación porque podría llevar a un detrimento patrimonial por ser una entidad del Estado, como también iría en contra de lo que dice la ley, y si bien ya hay una línea elaborada de la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que la exequibilidad del artículo 2 de la ley 797 de 2003, le indica a COLPENSIONES seguir una línea completamente diferente, y de igual forma no es posible hacer una unificación de la jurisprudencia como lo indica el juez, ya que las altas Cortes han proferido sentencias en muchos sentidos y esto no permite dicha unificación; que nunca se ha querido generar una dilación por parte de este fondo, pues cada planteamiento que se ha hecho tiene una línea delimitada por parte la gerencia de defensa judicial y la dirección de procesos judiciales, sumado a lo que tiene que ver con el comité de conciliación, es decir, que el como apoderado deben seguir unos lineamientos de la entidad; e insiste que no se le deben imponer costas procesales a COLPENSIONES, toda vez que solo esta ejerciendo su derecho de defensa, pero sin tener que ver con el traslado del demandante, por lo que solicita se revoque

en su totalidad la decisión o de manera parcial levantando las cosas que le fueron impuestas a COLPENSIONES.

Conoce igualmente la Sala del asunto por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En el término concedido a las partes para alegar de conclusión, el apoderado de COLPENSIONES se pronunció solicitando revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar absolver a la entidad de todas las pretensiones de la demanda, haciendo referencia a las negaciones indefinidas, al estándar probatorio y la disminución del peso demostrativo del formulario de afiliación, la información que se debía brindar para la época y la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, remitiéndose al artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

Por su parte, el apoderado de la demandante solicita se confirme en su integridad gramatical, todas y cada una de las decisiones, toda vez que se logró probar que la decisión de traslado fue motivada e inducida por una información imprecisa e incomprensible que suministró el asesor del Fondo Privado, el cual no logró acreditar que actuó de manera responsable, diligente y objetiva frente al manejo de la información laboral y de seguridad social en pensiones, trayendo la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES, en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Cabe advertir, que el único

tema recurrido por el apelante concierne a las costas procesales impuestas, y si bien hace múltiples reparos de la sentencia en lo que respecta a los temas del allanamiento, conciliación, los lineamientos de la entidad, garantías procesales y la dilación del proceso, todo va encaminado para que sea absuelto de las costas procesales y se haga un estudio del traslado del actor.

Conviene puntualizar que, entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* el señor EFRÉN CARDOZO PINZÓN nació el 5 de septiembre de 1956; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 29 de abril de 1985, realizando cotizaciones desde dicha fecha y acumulando un total de 1.6,86 semanas de cotización; y *iii)* el 11 de octubre de 1996 suscribió el respectivo formulario a la AFP PROTECCIÓN S.A.

Ahora. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993¹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una

¹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. Nº 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se

requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;

- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en sus alegatos, en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta,

especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que el demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual, junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

De igual forma, tampoco es de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frete al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes,

o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a la devolución de dineros distintos a los aportes obligatorios, tales como cuotas de administración, seguros previsionales, porcentaje de garantía de pensión mínima u otros conceptos, basta con indicar que, siguiendo aquellos mismos pronunciamientos de la jurisprudencia laboral, esta Sala ha considerado que es factible ordenar a las AFP correspondientes, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación fallida, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto las cosas vuelve a su estado anterior, como si el traslado nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y

*para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)*

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."*

En lo que tiene que ver con la orden del a quo, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se pudiera haberse pagado a favor del actor, tal decisión resulta desacertada, toda vez que al ser ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será precisada.

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será **CONFIRMADA**.

Condena en costas

Debe señalarse, que si bien el juez de primera instancia, había aprobado la conciliación entre PROTECCIÓN S.A. y el demandante, siendo decretada la nulidad por esta Sala, de lo actuado a partir de la audiencia llevada a acabo el 19 de septiembre de 2019, es necesario repetir frente a la declaratoria de ineficacia de traslado, que lo cierto es que el examen de esta pretensión respecto de COLPENSIONES

también debe ser analizado, toda vez que no se puede desligar dicha conciliación con las consecuencias jurídicas que ello conlleva, esto es, la aceptación nuevamente del actor como afiliado al fondo público sin solución de continuidad, contrariando la norma que prohíbe dicho traslado, y los efectos de retrotraer todo lo aportado en el fondo privado, lo cual afectan directamente los intereses de COLPENSIONES, haciendo la claridad que esta entidad no está legitimada en la causa para declarar la ineficacia por sí misma, y por tanto, era indiscutible que COLPENSIONES presentara desconciertos.

Ahora. En lo que tiene que ver con la condena en costas impuesta a cargo de COLPENSIONES, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Pero, en estos casos, la condena a COLPENSIONES a recibir el valor de los aportes realizados a la AFP del RAIS y a reactivar la afiliación del demandante, es solo la consecuencia lógica de la orden previamente impartida en este proceso en el sentido de declarar la ineficacia de esa afiliación al RAIS, de manera que bien puede decirse que, sin esta orden, aquellas condenas no se hubieran producido.

Dicho de otro modo, era inexigible otra conducta para COLPENSIONES antes de que la presente declaratoria de ineficacia del traslado se hubiere proferido, pues esta entidad no es autoridad judicial como para resolver, antes del proceso, la reclamación del demandante. Y por tal razón, en este puntual aspecto será **REVOCADA** la decisión.

No son más los temas a resolver.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el día 24 de mayo de 2022, pero la **REVOCA** exclusivamente en cuanto condenó en costas a COLPENSIONES, para en su lugar absolverla por este concepto. **PRECISANDO** que se hubiese pagado bono pensional tipo A, a favor del demandante, la devolución del importe del mismo, debe efectuarse al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES. Respecto del importe de bono pensional distinto al tipo A, se confirma que debe ser entregado a COLPENSIONES.

Sin costas en esta instancia. Se advierte que el Magistrado JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ quien integra la Sala se encuentra impedido en el presente proceso, razón por la que se recompone la Sala con el Magistrado que le sigue en turno.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Hugo Alexander Bedoya Díaz
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **49bdf72b6d445abe3ed31024ffcb0242343ae875294054f82a95811487bb9ecc**

Documento generado en 27/04/2023 02:47:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>